



Carlos A. Guevara coordina el sistema de información de *Somos Defensores*, un programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos en Colombia. Es periodista, realizador audiovisual y comunicador social especializado en temas de derechos humanos, conflicto armado, opinión pública, derechos digitales, construcción de paz y Acción Humanitaria Sin Daño. Tiene amplia experiencia en acompañamiento, capacitación y asesoría a procesos y organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Honduras y México, en temas de incidencia política, manejo de opinión pública y derechos humanos, comunicación para la protección, análisis de riesgo, autoprotección y manejo de comunicaciones en situaciones de crisis.

¿Cuál es la situación de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla? ¿Qué perspectivas hay de que se pueda lograr una paz duradera?

El proceso de negociación con la guerrilla más antigua del mundo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), se inició en 2012 y ha dado muchos resultados. Sigue habiendo muchos escépticos, pero lo cierto es que se ha llegado a acuerdos en los puntos más delicados, tales como los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, las reparaciones a las víctimas. Ahora se están abordando los últimos puntos, entre ellos las garantías físicas para las personas que se desmovilicen. Otra cosa muy positiva es que hace unos días la otra guerrilla que queda en Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), anunció la constitución de una segunda mesa de diálogo, para la cual se usará como base lo que ya se ha negociado con las FARC. Fusionar ambas mesas no es posible porque las dos guerrillas son bastante distintas, tanto en sus objetivos como en su estructura: las FARC son mucho más grandes, de mayor poder territorial y con una estructura vertical. El ELN es mucho más horizontal, con lo cual negociar y tomar decisiones es más complicado y lleva más tiempo.

Al desescalar el conflicto, el año pasado fue para Colombia el menos violento de los últimos cincuenta años. Hubo una reducción de las acciones violentas cercana al 98%, y en los últimos tres años los homicidios bajaron desde unos 17 mil a 12 mil. Pero al mismo tiempo sucede algo muy preocupante: el resurgimiento de algunos grupos paramilitares. Hace unas dos semanas un grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia hizo un “paro armado” en varios departamentos de la costa norte del país, consistente en un toque de queda con órdenes a todos los pobladores de no salir, bajo pena de muerte. Hasta el momento este grupo se dedicó básicamente a actividades criminales – tráfico de drogas,

extorsión, secuestro – pero ahora busca exhibirse como una fuerza con control territorial para poder entrar en las negociaciones de paz. La razón por la cual nadie quiere quedar fuera del proceso de paz es que Colombia tiene un ejército de medio millón de hombres, el segundo más grande del continente, y un punto ya negociado con la guerrilla es que no será reducido. Ningún grupo armado podrá enfrentarlo una vez que ya no estén las dos guerrillas que lo han mantenido ocupado.

Cuando se habla de las negociaciones de paz daría la impresión de que están sentados el gobierno de un lado de la mesa y las guerrillas del otro. ¿Dónde ha estado, cuál ha sido el rol de la sociedad civil colombiana en este proceso?

A la sociedad civil no se le da mucha prensa, pero lo cierto es que es la pieza clave de la construcción de la paz en Colombia. Durante muchos años los defensores de derechos humanos han luchado por la salida negociada del conflicto, y ahora son los principales activistas por la paz. Desde que comenzaron las negociaciones, toda la sociedad civil – a nivel nacional, regional, local – ha formulado propuestas para llevar la paz a los territorios, y las ha hecho llegar a la mesa negociaciones. Por ejemplo, el tema de cómo la violencia ha afectado en forma diferencial a las mujeres entró en las negociaciones gracias al trabajo del movimiento de mujeres de Colombia. Y es por eso que los acuerdos logrados ahora incluyen una perspectiva de género.

La sociedad civil es fundamental para la construcción de la paz porque ella es la que hace audible la voz de las comunidades más desfavorecidas en las negociaciones de La Habana. La sociedad civil está sirviendo de puente.

¿De qué modo se vieron afectados por estos procesos – antes la guerra, ahora las negociaciones de paz - los defensores de derechos humanos? ¿Han aumentado en los últimos tiempos los peligros que enfrentan, o han cambiado de naturaleza?

Somos Defensores es un programa no gubernamental de protección de activistas y defensores. Paradójicamente, la búsqueda de la paz ha sido un detonante para que la violencia contra los defensores se incrementara. Ello ha pasado en otros procesos de paz: en Guatemala, El Salvador, Burundi, Filipinas... el patrón es el mismo: cuando se acerca el momento de implementar los acuerdos en los territorios, los líderes sociales y defensores son los más afectados, porque son los que realmente conocen a las comunidades locales y sus problemas. Concretamente, si hay problemas de narcotráfico, el defensor de derechos humanos conoce quién es el pequeño narcotraficante que controla la zona, porque vive allí. Ello lo vuelve peligroso para quienes no quieren la paz.

Desde que se inició el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 fueron asesinados al menos 365 defensores de derechos humanos, aproximadamente uno cada seis días. En los primeros tres meses de 2016 hubo 133 defensores agredidos, más de 80 amenazados y casi 20 asesinados. Esto no es nuevo. Los paramilitares son la fuente casi exclusiva de amenazas. El peligro aumentó con los diálogos: tan pronto como los defensores empezaron a participar en las mesas de La Habana en 2014, comenzaron las amenazas masivas, las descalificaciones y los atentados para frenar su participación en el proceso de paz.

En la época de la guerra más intensa el nivel de denuncia era mínimo, por lo que no pudimos llevar la cuenta de las amenazas, los exilios y los asesinatos. Recoger los datos importaba mucho menos que salvar a la gente. Con la disminución de las acciones violentas hemos podido acceder a más información, y además la gente tiene más tranquilidad para hacer denuncias. Por eso tenemos más datos, y podemos decir que la proximidad de la paz ha transformado la violencia contra los defensores. Primero, no son atacados los principales

líderes o los activistas más visibles, porque el costo político es demasiado alto. Son atacados en cambio los “líderes bisagra”, es decir, los que conectan a las bases en el territorio con los principales líderes de la sociedad civil. Más del 80% de los asesinados en los últimos tres años pertenece a este tipo de liderazgo. Segundo, se ha disparado una forma particular de agresión: el espionaje y el robo de información sensible. Por ejemplo, entran a la sede de una organización y sustraen solamente los discos duros, o interceptan a un defensor de derechos humanos en la calle y sólo le roban el computador. El espionaje ilegal contra defensores es un problema dramático en Colombia; [Privacy International](#) publicó recientemente dos muy buenos [informes](#) sobre el tema. Es que dentro del establecimiento hay sectores que no quieren la paz y han tratado de torpedearla de mil maneras, entre otras mediante el espionaje ilegal. De hecho, el propio Presidente de la República y los negociadores del gobierno en La Habana han sido víctimas de interceptaciones ilegales.

Claramente las agresiones que sufren actualmente los defensores de derechos humanos en Colombia son perpetradas mayormente por actores no estatales. ¿Está el Estado haciendo lo suficiente para protegerlos? ¿Qué acciones concretas debería adoptar el gobierno?

Debido al alto nivel de violencia existente, Colombia tiene desde hace unos quince años un mecanismo estatal de protección que administra medidas físicas tales como vehículos blindados, escoltas armados, chalecos antibalas, teléfonos celulares de emergencia, etc. En 2011 el mecanismo fue transformado en un programa completo de protección no solamente para defensores sino también para periodistas, funcionarios públicos y políticos. Pero el Estado delegó su manejo en empresas de seguridad privada y la protección se volvió un enorme negocio. Ahora más de la mitad de los protegidos son funcionarios públicos, no activistas de sociedad civil. Y después de varios informes que hicimos logramos que se investigara y resultó que hubo mucha corrupción: el mecanismo fue defraudado por unos 150 millones de dólares. La efectividad del mecanismo lógicamente disminuyó.

Hoy el gobierno no está en condiciones de brindar garantías ni a las guerrillas desmovilizadas ni a los activistas por la paz. Primero porque son muchos, segundo porque no hay recursos suficientes, y tercero porque el modelo de protección que usa es obsoleto. Es imposible ponerles un carro blindado, un chaleco y una escolta armada a 35 mil personas que se van a desmovilizar. No puedes militarizar la vida cuando lo que estás tratando es de pacificar a un país que estuvo lleno de armas durante los últimos cincuenta años. Lo que se requiere son garantías políticas. El nivel de impunidad de los crímenes contra defensores es del 95%. Sin una justicia que dé resultados, y sin instituciones fuertes y transparentes, no podremos superar el conflicto.

¿Piensa usted que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada en el caso de Colombia? ¿Cómo podrían los actores externos – incluidas las organizaciones regionales y los movimientos de solidaridad internacional - apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil colombiana?

La sociedad civil reclama desde hace años que la comunidad internacional no se vaya de Colombia. Porque el gobierno ha dado a entender que con la firma de los acuerdos se acaban el conflicto y las vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, los países que han salido de conflictos como este generalmente enfrentaron en los primeros cinco o diez años de post-conflicto escenarios de violencia incluso más álgidos que en los últimos años de la guerra, porque es cuando la sociedad acomoda a sus nuevos integrantes. Las agencias de verificación internacional no se pueden ir de Colombia ni bien se firmen los

acuerdos; necesitamos por lo menos diez años más de acompañamiento. El conflicto todavía no se ha resuelto de manera profunda y definitiva: recién estamos hablando de la desmovilización de las guerrillas, no la construcción de la paz. En primer lugar, es necesario volcar recursos para que la construcción de la paz sea un asunto ciudadano. Segundo, necesitamos apoyo económico para explorar nuevas opciones para proteger a los defensores. Tercero, necesitamos ayuda para hacer frente a las nuevas violencias que se están gestando en los territorios, en particular las generadas en torno de la industrias extractivas. Y ahí la comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad, porque las grandes empresas mineras que están llegando son canadienses, británicas, españolas, brasileñas, estadounidenses, japonesas... todos países que colaboran en derechos humanos con nuestro gobierno y nuestras organizaciones de la sociedad civil.

- ***Twitter: @SomosDef***